

ORLANDO PLAZA
Coordinador

CAMBIO SOCIAL EN EL PERÚ 1968-2008

Homenaje a Denis Sulmont

Segunda edición

Capítulo 3



FONDO
EDITORIAL

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Cambios sociales en el Perú 1968-2008

Orlando Plaza (coordinador)

© Orlando Plaza (coordinador)

De esta edición:

© Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012

Av. Universitaria 1801, Lima 32 - Perú

Teléfono: (51 1) 626-2650

Fax: (51 1) 626-2913

feditor@pucp.edu.pe

www.pucp.edu.pe/publicaciones

Cuidado de la edición, diseño de cubierta y diagramación de interiores:

Fondo Editorial PUCP

Primera edición Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas,
Políticas y Antropológicas (CISEPA), octubre de 2009

Segunda edición, marzo de 2012

Tiraje: 500 ejemplares

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio,
total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores

ISBN: 978-9972-42-993-4

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2012-03819

Registro de Proyecto Editorial: 31501361200248

Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa

Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú

CAMBIOS EN LOS VÍNCULOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO EN EL PERÚ: 1968-2008¹

Aldo Panfichi y Omar Coronel

Entre 1968 y 2008 el Perú ha pasado por distintos regímenes políticos, modelos económicos, proyectos de sociedad, buscando resolver los históricos problemas de pobreza y exclusión de la mayoría de la población. De una dictadura militar que buscaba representar las demandas de cambio transformando la sociedad desde el Estado, se pasó en los ochenta a una democracia que consolidaba su representatividad con la aparición y reafirmación de actores como partidos políticos, sindicatos, gremios empresariales, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales (ONG). No obstante, al final de esta década, la falta de visión de la clase política para comprender que el vínculo representativo a través de los grupos de interés existentes se tornaba ineficaz, sumada a la violencia política y la crisis económica, fueron cerrando la oportunidad de institucionalizar la precaria democracia. Frente a lo anterior, en los noventa, se instala un nuevo régimen autoritario y neoliberal reemplazando el modelo Estado-céntrico por un modelo mercado-céntrico, e implementando una política del miedo que desincentivó la participación. Finalmente, con la caída del autoritarismo y la transición a la democracia, lo que hemos tenido en los dos últimos gobiernos de inicios de siglo ha sido la continuación del modelo neoliberal.

Durante todo este periodo, los vínculos entre la sociedad y el Estado no han permanecido iguales. Varios tipos de relación se han intentado imponer con diferente éxito. El vínculo patrón-cliente del orden oligárquico fue reemplazado por el corporativista del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFA) en los setenta; y este, a su vez, fue sustituido por el vínculo representativo en los ochenta. En los noventa, se constituye un vínculo neoclientelista y antipolítico a través de operadores políticos independientes, también denominado *brokerage*.

¹ Queremos agradecer a Guillermo Rochabrún por sus comentarios al borrador inicial de este trabajo, y a Orlando Plaza por las numerosas revisiones y sugerencias a esta versión final.

Y en la década actual, a pesar de los intentos por establecer un vínculo participativo y reconstruir la capacidad de representación de los partidos, lo que ha primado es la continuación del vínculo neoclientelista y la relación conflictiva con sectores que no tienen intermediadores. Por supuesto, ninguno de estos vínculos es exclusivo en cada etapa. Por el contrario, en cada una de ellas conviven y/o se articulan varios de estos. Sin embargo, en cada periodo siempre hay uno que logra imponerse o parece predominar frente a los demás.

En este contexto histórico, interesa explicar la cuestión central de por qué se dan estos cambios en los vínculos o mecanismos de intermediación sin que ninguno de ellos pueda consolidarse y mejorar la relación entre la sociedad y el Estado. Para absolverla, proponemos una lectura sociológica desde la perspectiva estructural. Sostenemos las hipótesis de que *a)* determinados cambios estructurales intervienen en la modificación de los intereses societales, *b)* que estos «nuevos» intereses, sumados a otros que se mantienen, producen modificaciones en los vínculos entre los actores sociales y el sistema político, y *c)* que los partidos u otras organizaciones de intermediación no han podido recoger la nueva diversidad de intereses. Siguiendo a Frances Hagopian, nos preguntamos cuándo, cómo y por qué se han reorganizado los intereses societales y cómo estos se han revinculado con las instituciones políticas (Hagopian, 2000). Pensamos que para responder a estas preguntas es necesario identificar y analizar tanto los procesos estructurales de larga duración que modifican las bases sociales del medio de intermediación, como el impacto de crisis políticas y económicas específicas.

En el desarrollo de este trabajo, ubicamos dos momentos o hitos en los cambios de intereses societales y sus revinculaciones o ausencia de ellas entre la sociedad y el Estado. El primero habría ocurrido a fines de los años sesenta con los procesos que motivan la emergencia de intereses societales que rechazan el orden oligárquico; y el segundo habría ocurrido en los años noventa con la continuación o radicalización de algunos procesos (urbanización, violencia política) y la aparición de otros (neoliberalismo) que vuelven a modificar los intereses societales que esta vez rechazan el modelo Estado-céntrico. Actualmente, como antes, continúan algunos procesos y emergen nuevos que influyen en los intereses societales. No obstante, no tenemos aún evidencias que nos permitan hablar de un tercer cambio importante de estos intereses.

Para el desarrollo de este trabajo, es importante que detallemos, en primer lugar, dentro de qué marco de investigación se ubica y qué posición tomamos frente a ese marco.

1. ¿CÓMO ABORDAMOS EL TEMA?

La mayor parte de la literatura en ciencias sociales, al analizar la relación entre la sociedad y el Estado, se concentra en la representación política. Nosotros preferimos hablar de «tipos de vínculos» o «mecanismos de intermediación» en tanto que una eficaz «representación», como se la entiende, se ha producido en la historia política peruana solo durante un periodo muy corto, la década de los ochenta. Entendemos el modelo representativo siguiendo la definición que utiliza Martín Tanaka². Estamos de acuerdo con él en que, durante la década de los ochenta, el sistema de partidos en el Perú funcionó y logró cumplir sus tareas representativas³. Siguiendo a los teóricos de la democracia liberal, para hablar de representación en las democracias latinoamericanas, los sistemas de partidos deben cumplir tres requisitos mínimos: *a)* ser capaces de expresar las preferencias electorales dentro de los márgenes establecidos por ellos, *b)* intermediar y expresar en la esfera política los intereses y las demandas de los principales grupos de interés y movimientos, y *c)* mantener vigentes los pactos, explícitos e implícitos, entre los actores relevantes que permiten la continuación del juego democrático.

Siguiendo el ensayo bibliográfico de Pedro Pablo Luna (2007) sobre la representación política en América Latina, la lectura de los cambios en los vínculos o mecanismos de intermediación se puede abordar desde tres perspectivas principales:

- *La perspectiva institucional:* se ha centrado en describir las características de las élites partidarias y sus interacciones en el marco de las instituciones electorales formales que rigen cada sistema. Las investigaciones orientadas por esta perspectiva han centrado la explicación del cambio en el nivel de institucionalización de los partidos (Mainwaring & Scully, 1995) en si los partidos están pasando de ser «de masa» a «profesionales-electorales» y si están apareciendo nuevos partidos con características organizacionales más funcionales al contexto económico de crisis y austeridad (Coppedge, 1998), o en si los partidos funcionan como instituciones o como máquinas

² Según Tanaka, el modelo representativo clásico fue posible gracias a un proceso en el que se constituyeron tres pilares básicos. En primer lugar, los sistemas de partidos (expresión de los clivajes de la sociedad). En segundo lugar, el Estado de bienestar keynesiano (cuya capacidad redistributiva permitió que los términos de competencia política no fueran un juego de suma cero sino de suma positiva). Y, en tercer lugar, la incorporación de los grupos de interés y los movimientos sociales —de trabajadores y empresarios— en la esfera política (a través de pactos corporativos o de su institucionalización). Sin embargo, con los años la sociedad se tornaba más compleja y surgieron grupos que no se sentían incorporados, los «nuevos movimientos sociales». La dinámica representativa clásica tuvo que ampliarse y dar cabida a estos nuevos grupos de interés.

³ Véase más en Tanaka (1998).

políticas (Alcántara, 2004). En el Perú, tenemos algunos seguidores de esta perspectiva. Destacan los trabajos de Tuesta (1995), Tanaka (1998, 1999, 2005) y Pease (1999, 2008). Estos trabajos han tratado de explicar el colapso del sistema de partidos y la «crisis» de representación política centrándose en la dinámica de las élites partidarias y su relación con el resto de la sociedad.

- *La perspectiva no institucional*: se ha enfocado en explicar el cambio de vínculos a partir de una recompensa delegativa al buen desempeño económico. Este tipo de explicaciones surge a partir de casos como el Perú de Fujimori o la Argentina de Menem. En esta línea estarían los trabajos de las «democracias delegativas» (O'Donnell, 1994), del «neopopulismo» (Roberts, 1995; y Weyland, 1996) y de los *policy switchers* (Stokes, 2001). Todos estos estudios concluyen que el buen desempeño económico frente a la crisis económica de finales de los ochenta habría tenido un impacto significativo en la renovación del apoyo al liderazgo presidencial mediante un vínculo delegativo clientelista, y el trabajo de Panfichi y Sanborn (1997) se enmarcan en esta línea.
- *La perspectiva estructural*: esta entrada se centró en trabajar el tema de la crisis de representación a partir de determinantes estructurales. En esta línea estarían, principalmente, los trabajos sobre el realineamiento electoral (Hagopian, 1998) y sobre la evolución de vínculos entre partidos y electores (Roberts, 2002). Roberts propone sustituir el concepto de crisis de representación por el de cambio en el tipo de vínculo entre partidos y electores. Nosotros suscribimos este cambio de concepto y consideramos que debería extenderse, como ya lo hemos mencionado, hablando de un cambio en el tipo de vínculo entre la sociedad y el Estado. En el Perú, autores como López (1991 y 1997), Cameron (1992 y 1994), Roberts (1996) y Grompone (1991) ya han trabajado sobre este punto.

Nosotros nos ubicamos en esta última entrada. Además de las variables institucionales y no institucionales, las variables estructurales también deben tomarse en cuenta para explicar el cambio en el tipo de vínculo. Ahora, comprendemos que una entrada integral tendría que evaluar tanto la importancia de variables institucionales y no institucionales como los procesos estructurales pero, en tanto se ha abundado sobre las dos primeras entradas, nos parece pertinente enfocarnos en los procesos de largo plazo y su incidencia en la modificación de los intereses societales y los vínculos con las instituciones políticas.

Para abordar el tema, hemos organizado la exposición a partir del análisis de cuatro periodos (de 1968 a 1980; de 1980 a 1990; de 1990 a 2000; y de 2000 a 2008) y dos momentos centrales de reorganización de intereses societales (la transición del modelo oligárquico al modelo Estado-céntrico, en 1968; y la transición de este último al modelo neoliberal, en 1990). No podemos hablar aún de un tercer momento, pero señalamos los nuevos procesos estructurales que podrían ir modificando los intereses societales que se formaron desde inicios de los noventa.

2. PERÍODO DE 1968 A 1980

2.1 Primer momento: ¿Cuándo, por qué y cómo se reorganizan los intereses societales?

Como indica Teresa Tovar, 1968 no es el inicio del ocaso de la sociedad oligárquica, sino la última etapa del proceso que llevó a su desaparición (1985, p. 25). En efecto, desde los años veinte, Haya y Mariátegui habían encabezado y representado un fuerte sentimiento antioligárquico de los sectores populares y medios de la sociedad peruana, que incluso alcanzó a mediados de siglo a sectores vinculados a la Iglesia, las Fuerzas Armadas, y a profesionales liberales. En los años sesenta, con la profundización de los procesos de industrialización, migración y urbanización, la sociedad peruana cambió radicalmente y las grandes mayorías (los campesinos, las mujeres pobres y los jóvenes migrantes) fueron desplazadas del lugar (en el sentido ideológico y geográfico) al que el orden oligárquico los había confinado por largo tiempo (Grompone, 2005).

Junto con los procesos de migración y urbanización, y el consiguiente desplazamiento de las mayorías de sus clivajes históricos, ocurre otro cambio de enorme trascendencia en el campo de las ideas. Se trata del acceso sostenido a la educación por parte de los sectores populares movilizados que, según Alberto Flores Galindo, representó una grieta fundamental para el orden oligárquico (1999, pp. 56-58). En efecto, a fines de los años sesenta, en la mayoría de escuelas y universidades públicas se había consolidado una visión de la sociedad peruana que descalificaba la Conquista y el papel desempeñado en nuestra historia por las clases altas, a la par que exaltaba los movimientos sociales. Esto es lo que Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliart (1989) denominaron la «idea crítica». Además de ofrecer una nueva lectura de la realidad del país, la idea crítica propone una ética igualitaria y un impulso democrático asumido por el dirigente popular, el profesor de colegio y el militante de base.

La Lima de esos años vivía un fuerte impulso industrial. Desde los años cincuenta, la industrialización apareció como la clave del desarrollo nacional⁴. En los primeros siete años de aplicación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) —de 1959 a 1966— que siguieron a la promulgación de la Ley de Promoción Industrial, el producto bruto interno (PBI) alcanzó la tasa de crecimiento más alta (7,3%), al igual que la producción manufacturera que creció a una tasa promedio anual de 10,3% (Jiménez, 1999, p. 21). Desde 1956 se da un activo proceso de sindicalización y en 1968 se reconstituyó la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Flores Galindo señala que el tipo de relación entre los patrones y obreros reproducía la relación entre terratenientes y siervos, marcada por el paternalismo. Los jóvenes obreros, que habían sido formados en la idea crítica, respondieron a este orden formando sindicatos y produciendo enfrentamientos cada vez más frecuentes. Los patrones empresarios respondieron cambiando el paternalismo por el autoritarismo, lo cual llevó a que los obreros radicalizados adscribieran el «clasismo», descartando el diálogo como medio para conseguir sus reivindicaciones. Se pasó a las huelgas, marchas y ocupaciones de fábricas. Sinesio López (1997, p. 315) define el clasismo peruano como «la forma que asumió el movimiento obrero desde fines de los sesenta hasta comienzos de los ochenta e influyó decisivamente en otros movimientos sociales de la misma época. Sus características principales fueron las demandas igualitaristas como objetivos del sindicato, la confrontación abierta como forma de lucha, la intransigencia y la combatividad como estilo sindical, la centralización y la disciplina rígida en la organización, el cultivo de la solidaridad y la autonomía de clase como valores fundamentales de los trabajadores y la fusión sindical de lo social y lo político».

El desarrollo de la idea crítica y el clasismo contribuyó a que los sectores excluidos (principalmente campesinos y sectores urbano marginales) comiencen a demandar un vínculo representativo que no encontraban en el sistema político, una representación que defendiera sus intereses. El orden oligárquico de vinculación entre lo social y lo político excluía a los analfabetos (mayormente indígenas o población campesina pobre) y se articulaba regionalmente a través de gamonales, en una lógica de patrón-cliente. Solo la emergente clase media y los sectores oligárquicos eran representados por los partidos. Sin embargo, es importante destacar que, desde finales de los cincuenta, partidos reformistas como Acción Popular, Democracia Cristiana y el Movimiento Social Progresista representaron

⁴ Aunque «fue el capital extranjero el que lideró la modernización urbano-industrial de la economía en alianza con algunos sectores empresariales oligárquicos y nacionales con los sectores medios» (López, 1991, p. 148).

la incursión democrática de las nuevas clases medias que buscaban la inclusión de sectores populares en el sistema político. Pero la oligarquía insistía en conservar el orden estamental, aquel que naturalizaba la idea de que los campesinos y sectores populares no podían participar políticamente, que sus intereses no podían ser representados. Ese imaginario, que ya no podía resistir los procesos de cambios socioeconómicos traducidos en la idea crítica y el clasismo, será violentamente desplazado con la revolución de las Fuerzas Armadas.

2.2 ¿Cómo es que los nuevos intereses societales se logran vincular con las instituciones políticas del GRFA?

Frente a la irrupción de los movimientos sociales (campesinos, sindicales, de barrios) y movimientos guerrilleros en los sesenta, y a la ineficacia de los gobiernos civiles para realizar las reformas que la sociedad demandaba, un grupo de militares decidió dar un golpe para transformar el Estado y la sociedad «ordenadamente», y para frenar el avance del discurso y el accionar de la izquierda radical. El GRFA se autonombró representante de la sociedad antioligárquica, tanto de los sectores populares como de las clases medias y empresariales. Esta «representación» no fue el resultado de una ampliación del sistema político, de un mandato que nace de una elección popular (representación legal) o de una revolución social (representación sociológica), sino de la irrupción violenta de las Fuerzas Armadas para realizar una «revolución» en el nombre del pueblo. Los integrantes del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, como señalan varios autores, asumían que la sociedad peruana solo se podía cambiar desde el Estado.

El GRFA finaliza el proceso de descomposición del orden oligárquico. La radical reforma agraria, las reformas laborales, la reforma institucional con la que el Estado se convertía en el organizador máximo de la sociedad, y el discurso pro campesino y popular canceló el orden oligárquico. El GRFA decide articular la sociedad en un marco corporativista, donde el Estado revolucionario represente al conjunto de la sociedad. Legaliza así los nuevos sindicatos liderados por una nueva generación de dirigentes izquierdistas que desplazan al APRA del sindicalismo, y promueve la formación de organizaciones barriales, campesinas y obreras a través del Estado (por ejemplo el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) o la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP)), y de organizaciones con mayor grado de autonomía (CGTP). Se intenta establecer, entonces, un vínculo corporativo donde los grupos de interés (sindicatos, gremios, movimientos) deberían ser controlados por el gobierno. En los términos en que lo hemos definido, el vínculo representativo no existe durante este periodo:

el GRFA es una dictadura y establece un tipo de vínculo desde el poder en busca de hacer sostenible su régimen.

Las reformas de la revolución velasquista, acompañadas por grandes tomas de tierras del movimiento campesino sobre todo en el centro y sur andino, dejan, sin embargo, vacíos en la estructura de poder en el campo. Desaparecen las haciendas y los grandes propietarios, prevalece el sector asociativo (cooperativas y Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS)) y las comunidades campesinas. Estos vacíos serán ocupados por comerciantes, maestros de escuela y profesores universitarios, muchos de ellos marxistas, que en su vinculación con los alumnos reproducirían la relación autoritaria entre el gamonal y el campesino. La superioridad ya no se sostendría en la «raza», sino en la «ciencia» del materialismo histórico (Degregori, 1993). Bajo la premisa de una naciente sociedad igualitaria, la educación se constituye como el camino principal para llegar al progreso a la vez que, como señala Portocarrero, se daba la promesa de la ciudadanía a cambio del olvido de la cultura originaria.

En los espacios urbanos, se fortalecía el clasismo. Los obreros, avalados por una legislación laboral favorable y nuevas leyes de la comunidad industrial, cuestionaron fuertemente las relaciones de poder y trabajo existentes en las fábricas. Carmen Rosa Balbi (1989, p. 49-54) resalta cómo el clasismo desarrolló un fuerte impulso igualitario entre los obreros y de dignidad con los patrones, destruyendo la estructura de relaciones paternalistas y autoritarias de la sociedad oligárquica. Ante el estallido de la crisis económica de 1974, el movimiento sindical clasista se enfrenta también al gobierno militar y demanda la radicalización de las reformas, en una dirección socialista. De esta manera, el sindicalismo desbordó los límites que buscó imponer el gobierno reformista.

El movimiento de barrios también se ve legitimado por el gobierno revolucionario. Velasco autoriza las invasiones de terrenos buscando encontrar allí bases sociales de apoyo y les cambia el nombre: de ser calificadas con el epíteto peyorativo de «barriadas» pasan a llamarse «pueblos jóvenes», dándoles así un sentido más benigno y esperanzador. El movimiento barrial, al igual que el sindicalismo, recibe también el aliento del gobierno para organizarse al mismo tiempo que desarrolla esfuerzos autónomos y, en los momentos de crisis económica, rompe los tutelajes y marcha en contra de él.

Por otro lado, el empresariado nacional abandonó rápidamente su simpatía por los partidos centristas y derechistas surgidos anteriormente, para vincularse pragmáticamente con el proceso de fortalecimiento del Estado, con el que se hacía negocios, y para aprovechar la política de fortalecimiento del mercado interno impulsada por los militares. El temor al desborde popular unía a empresarios, clases medias profesionales y militares. Sin embargo, esta alianza se resquebraja

cuando el GRFA decide estatizar los principales medios de comunicación en 1974. Este fue un hecho emblemático que mostró la pérdida de poder e influencia de estos sectores sobre el gobierno y que los llevaría al campo de la oposición activa.

De esta manera, hacia el final del periodo velasquista (1968-1975), los movimientos sociales rebasan la estrategia gubernamental de establecer un vínculo corporativo con la sociedad; se convierten en los actores sociales y políticos principales desbordando el marco propio de la revolución militar. En este momento, se termina el experimento peruano y se inicia el periodo de la contrarrevolución, dirigida por el general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). Por su lado, el movimiento popular sigue creciendo y articulándose a nivel nacional bajo la hegemonía ideológica del clasismo.

Los otros actores en la escena son los nuevos partidos de izquierda y la clase media alta. Los partidos estaban proscritos porque la revolución militar no aceptó principios de representación alternativos y buscó bloquear todo mecanismo de intermediación que no estuviese controlado por el gobierno. El discurso del GRFA partía de una visión simplista y polarizada cuando, por contraparte, la sociedad se tornaba mucho más compleja y diversa. A pesar de la proscripción, diversos partidos de la «nueva izquierda» marxista fueron expandiéndose organizativamente desde las escuelas y universidades hacia los barrios, industrias, minas y comunidades campesinas, al mismo tiempo que proponían discursos alternativos y utopías políticas. Es importante remarcar que, en este momento, el maoísmo tuvo una fuerte influencia en las universidades nacionales y en el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEP). Nicolás Lynch (1990, pp. 64-68) dirá que en los setenta San Marcos era un templo de Mao.

Entre 1977 y 1979 se da el primer ciclo de protesta verdaderamente nacional. Desde el histórico primer paro nacional del 19 de julio de 1977, se suceden grandes movilizaciones lideradas por el movimiento sindical reclamando el retorno a la democracia. El periodo termina en 1979 con la convocatoria a elecciones para elegir una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución política. Es un evento trascendental en la historia de los vínculos entre la sociedad y la política en el Perú. Por primera vez en la historia republicana se dará una efectiva representación política: votarán los analfabetos y la izquierda marxista no estará proscrita en las elecciones. Son elegidos representantes de todos los sectores, el APRA, el Partido Popular Cristiano, Democracia Cristiana y varios partidos de la izquierda marxista que posteriormente se acoplarán en la Izquierda Unida. Solo Acción Popular se niega a participar en estas elecciones abogando por el retorno a la Constitución de 1933, es decir, invisibilizando los grandes cambios ocurridos. Irónicamente, sería el partido ganador en las elecciones generales de 1980. En síntesis, el proyecto de vinculación corporativista es rebasado por el

movimiento popular que el Estado intentaba controlar y, con la crisis económica, se desmorona para dar paso al retorno de la democracia.

3. PERÍODO DE 1980 A 1990

En 1980, luego de doce años de dictadura militar, la sociedad peruana se había transformado debido a grandes reformas modernizadoras implementadas por el Estado y pasó a su etapa postoligárquica. Los ochenta amanecieron con una sociedad civil organizada y politizada, un Estado grande e ineficiente, pero también con el inicio de la lucha armada por parte de un grupo radicalizado de estudiantes universitarios y maestros de las regiones más pobres e indígenas del país. Al mismo tiempo, las elecciones generales de 1980 reestablecieron el régimen democrático, y la competencia electoral permitió canalizar emergentes identidades sociales y políticas que optaron por participar en el nuevo sistema político.

3.1 ¿Cómo es que los intereses societales se revinculan con las instituciones políticas del régimen democrático?

Desde los años setenta, se habían venido configurando identidades políticas que en términos generales correspondían a identidades sociales. La identidad social, mayormente de clase, podía indicar a los sociólogos la probable identidad política de los individuos (afiliación partidaria, pertenencia a movimientos). Varios científicos sociales creían que, efectivamente, se estaba pasando de una sociedad estamental a una sociedad de clases⁵. Existía una correlación entre clase y orientación y/o filiación política que se sostenía, al igual que en el resto de América Latina y el mundo. Sin embargo, a lo largo de los ochenta, esta correlación va a cambiar, se va a complejizar y va a desaparecer.

A inicios de los ochenta, funcionaban varias instituciones representativas que fortalecían la democracia: *a)* los partidos: una alianza entre Acción Popular y el Partido Popular Cristiano (escisión de Democracia Cristiana), ubicada a la derecha del espectro político; el APRA al centro; y el frente de la Izquierda Unida, que agrupaba a distintas capillas de la izquierda marxista que decidieron integrarse a la democracia electoral⁶; *b)* grupos de interés: como los sindicatos que tenían el prestigio de haber sido protagonistas de la lucha por la democracia en la década pasada y los gremios empresariales congregados en la Confederación

⁵ Flores Galindo (1999, p. 53) señala que un síntoma de esto era el notable incremento organizacional de la sociedad civil (particularmente de clubes, cooperativas y sindicatos).

⁶ Estos cuatro partidos constituirían el sistema de partidos durante toda la década, acaparando la representación de la gran mayoría del electorado.

Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) (formada en 1984); *c)* los movimientos sociales: de barrios, regionales, estudiantiles y vecinales que también se habían plegado a las demandas sindicales, siendo en un momento hegemonizados por el discurso clasista; y *d)* las ONG y la Iglesia católica que, a lo largo de los ochenta, se encargarían de representar demandas que ni los partidos, sindicatos o movimientos trataban con importancia (fundamentalmente el tema de los derechos humanos). Las grandes movilizaciones de los setenta habían quedado atrás, pero la ciudadanía participaba políticamente a través de estas instituciones, con identidades políticas relativamente estables.

Es importante resaltar que en el Perú, a diferencia de otros países de Latinoamérica, los movimientos sociales de los setenta y ochenta no eran totalmente autónomos, sino que estaban estrechamente vinculados a los partidos de izquierda, que los apoyaban desde el parlamento y los municipios, y defendían sus intereses ante el Ejecutivo. Pensamos que no nos equivocamos al señalar que en el parlamento la izquierda representaba los intereses de los sectores populares. Tanaka sostiene que la izquierda representaba «demasiado» estos intereses, siendo difícil, muchas veces, diferenciar el espacio político del espacio social⁷. Es por esto que, cuando los partidos van perdiendo espacio, los movimientos también se verán seriamente debilitados.

Al igual que en los setenta, el conflicto social en los ochenta se expresa en movimientos sociales pero, a diferencia de la década anterior, ahora también se canaliza a través de los partidos de izquierda. Tanaka le llama a esto la «lógica electoral-movimientista», donde el juego representativo se determinaría en dos dimensiones: la primera, en las elecciones generales, con opciones limitadas al sistema de partidos y; la segunda, en la intermediación constante entre la sociedad y la política a través de los grupos de interés y los movimientos sociales. No obstante, a diferencia de los setenta, el movimiento popular no vuelve a estar articulado a nivel nacional. La inadecuación del clasismo al nuevo régimen democrático lo hizo ineficaz para tramitar los intereses de los trabajadores por

⁷ Tanaka señala que los partidos de izquierda crecieron y se desarrollaron estrechamente ligados a las organizaciones sociales (la CGTP con el Partido Comunista Peruano (PCP), el SUTEP y estudiantes con Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), la Confederación Campesina del Perú (CCP) y organizaciones barriales con el Partido Unión Mariateguista (PUM), la Confederación Nacional Agraria (CNA) con el Partido Socialista Revolucionario (PSR), etcétera). Por el lado de la derecha, la CONFIEP se relacionó estrechamente con Acción Popular (AP) y el Partido Popular Cristiano (PPC) e inclusive con el APRA, hasta antes de la estatización de la banca (Tanaka, 1998, pp. 76-77). Posteriormente, los grupos de interés empresariales se vincularían con el Movimiento Libertad y, más adelante, con el Frente Democrático Moralizador (FREDEMO), pero nunca serían tan dependientes de los partidos como los grupos de interés de los trabajadores. Es por esto que sobrevivirían al colapso del sistema de partidos en los noventa.

lo que su hegemonía decae y los conflictos se vuelven más sectoriales aunque aún organizados en movimientos. De todas formas, a diferencia de los setenta, sin articulación, los movimientos no representarán amenaza para el régimen.

Por otro lado, a pesar de la voluntad nacional de comenzar una etapa democrática, respetando la constitución elaborada por los distintos partidos que representaban la posición de la mayoría del país, un grupo marxista leninista maoísta decidió iniciar la lucha armada y declararle la guerra al Estado. El Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), primero desde Ayacucho y luego desde distintas regiones, desató una ola de violencia terrorista sin precedentes en la historia republicana, forzando al Estado a responder, induciéndolo al genocidio. El gobierno de Fernando Belaúnde, con Acción Popular, renunció a la dirección de la lucha antisubversiva y la delegó a las Fuerzas Armadas. En estas condiciones, con el mandato de terminar el problema lo más rápido posible, las Fuerzas Armadas tuvieron carta libre para violar derechos humanos en el combate, como efectivamente lo hicieron⁸.

3.2 Segundo momento: ¿Cuándo y por qué se vuelven a reorganizar los intereses societales?

a) La incomprensión de los cambios sociales

En 1986, como agudamente anotó Nelson Manrique (2002, p. 65), el Perú tenía en el poder al partido reformista históricamente más importante del continente —el APRA—, la izquierda legal de mayor presencia política en la región —la Izquierda Unida— y la guerrilla [sic] más fuerte de América del Sur —el PCP-SL—. Sin embargo, indica Grompone (2005), el modelo de Estado y sociedad que proponían los partidos de masas, en especial el APRA y la Izquierda Unida, estaban descontextualizados. La globalización estaba en plena expansión, y el neoliberalismo crítico del Estado sobredimensionado se hizo hegemónico en el mundo. La economía y la sociedad tienden a la desregulación. La industrialización (para nosotros) pierde sentido y es sustituida por la reprimarización y terciarización de la economía. La identidad política se diluye frente a la inestabilidad de la identidad social. Definitivamente, la sociedad de fines de los ochenta no podía ser leída y dirigida con códigos de la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se estaba entrando a una sociedad más compleja, a una modernidad reflexiva. Sin embargo, los partidos seguían apostando por representar a los actores y el mundo social de los sesenta y setenta.

⁸ Solo en 1984 se produce el 19% del total de las muertes y desapariciones durante los veinte años de violencia. Véase CVR (2004, p. 24).

Así como la élite oligárquica no percibió a cabalidad el impacto de los grandes procesos estructurales de cambio de los cincuenta y sesenta, la élite política de los ochenta tampoco percibió los de su tiempo. En esta década, el modelo Estado-céntrico entró en crisis en toda la región. En el Perú, si bien nunca se llegó a consolidar un Estado desarrollista, tuvimos en su lugar Estados protectores y populistas, como el del gobierno militar. Sin embargo, en los ochenta, las diferentes crisis económicas, externas e internas (la deuda y la inflación), hicieron que este modelo sea cada vez más ineficiente. Guillermo Rochabrún (2007, p. 419) afirma que la crisis del Estado como mecanismo de redistribución para la burguesía, y el colapso de los servicios sociales para la población económicamente más débil, sería una de las razones que explicarían el cambio en la relación entre la política y la sociedad. Paralelamente, la industrialización por sustitución de importaciones se reveló inviable frente a la economía global, incrementando el desempleo y subempleo de manera sostenida (7,9% y 73,5%, respectivamente, en 1989) (Webb, 1991). Todo esto hacía ineficaz el trabajo de presión de los sindicatos, por lo que muchos obreros abandonaron el ideal del trabajo asalariado y se volcaron al sector informal. Como señala Jorge Parodi (1986), con la recesión y la necesidad de defender el puesto de trabajo, los trabajadores ya no asistían a las asambleas, reuniones y movilizaciones. Es el momento en el que los pequeños talleres y las organizaciones vecinales de sobrevivencia expanden su membresía. La informalidad se convierte en la mayor fuente de trabajo y erosiona la identidad clasista. Son los tiempos en que Parodi escribe que «ser obrero es algo relativo».

b) Procesos estructurales

Por otro lado, los procesos estructurales de urbanización y migración a la costa se habían intensificado tanto por las dificultades de la agricultura y ganadería como por la violencia política en los Andes. La población urbana pasó de ser el 58,1% en 1970 al 68,7% de la población en 1990. El incremento de la escolaridad continúa, pero el nivel de calidad de la educación pública se reduce debido a la menor inversión en el sector a partir de 1988, a raíz de la crisis económica. Como afirman varios expertos, la educación agotó su energía utópica, aquella que a través del mito de la educación y sus promesas de igualdad de oportunidades se había enraizado fuertemente en las comunidades campesinas. Los hijos de migrantes de los años sesenta, la segunda generación, habían crecido y formaban parte de la una nueva cultura urbana popular. Matos Mar, en 1984, la describe como la «fusión interregional de culturas, tradiciones e instituciones, con fuerte componente andino y dotada de un sentido propio de la ley y la moral [...] es un mundo que desborda el molde legal y que no encuentra límites entre

la clandestinidad, ilegalidad y el delito» (1984, pp. 90-91). Este mundo popular-informal ya no se sentía representado ni por los partidos ni por los movimientos sociales. Tanaka (1998, pp. 167-189) señala que, en los ochenta, la esfera política era fiel representante de la esfera social, un espejo de esta. Sin embargo, a finales de esta misma década, la esfera política parecía más un espejismo de la esfera social en tanto los partidos seguían representando a los grupos de interés y a los dirigentes de los movimientos sociales, pero estos representaban cada vez menos a la población. En este contexto, los ciudadanos se desligarán cada vez más de este tipo de vínculo con la política. Parecía el fin de la lógica electoral-movimientista.

c) Dos nuevos procesos en la escena mundial

Además de la continuidad de los procesos estructurales mencionados, nos alcanzan dos nuevos procesos: la crisis de modelo Estado-centrista y la globalización, con la difusión mediática de una gran variedad de discursos. Los nuevos procesos vuelven a reconfigurar los intereses sociales manifestándose a través del economicismo y pragmatismo. El economicismo implicaba la renuncia al compromiso ético igualitario de la idea crítica apostando por una lógica costo-beneficio como matriz de acción y análisis. Y el pragmatismo, por su parte, representaba la renuncia al compromiso, a la solidaridad con la «clase» que el clasismo había inculcado desde finales de los sesenta proponiendo coincidencias y acuerdos cambiantes y coyunturales.

En medio de las múltiples crisis, el economicismo y pragmatismo forzaban un individualismo necesario para competir por los pocos recursos. Si con la idea crítica y el clasismo se tenía una identidad política que respondía a una identidad social «estable», con el economicismo y el pragmatismo se tiene una identidad social «inestable» que no podrá prever una «identidad» política. Para Rochabrún, la disolución del carácter de clase en la población significaría un gran impedimento para su posibilidad de representación («¿cómo puedo —señala Rochabrún— buscar un representante si no sé lo que soy, ni lo que seré?»). Sin un anclaje socioeconómico definido, que perfile un presente y un futuro, la lógica de representación —como se la ha pensado y como se la sigue pensando— no sería viable (Rochabrún, 2007). Las bases ideológicas del modelo Estado-céntrico y de la representación política, como tipo particular de medio de intermediación entre sociedad y política, entraban en crisis.

d) Violencia política y crisis económica

Por otro lado, durante esta década se dieron también dos graves crisis: la violencia política y la crisis económica. Ambas crisis terminaron de derruir

las organizaciones que servían de anclaje a las distintas dimensiones identitarias. La violencia, tanto del PCP-SL como del Estado, desestructuró las diversas formas de organización popular. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) señala que la violencia afectó las formas sociales de organización de la producción y distribución, así como el desarrollo de la familia y la comunidad. Se alteraron las formas colectivas de organizar el trabajo, se suspendieron las redes y espacios de comercialización, y se paralizó el desarrollo comunitario. El conflicto armado interno paralizó el proceso de desarrollo del mundo rural (especialmente en Ayacucho y Huancavelica) dejando graves secuelas en la estructura productiva, la organización social, las instituciones educativas y los proyectos de vida de las poblaciones afectadas. Por otro lado, el PCP-SL se había infiltrado en algunos movimientos sociales y había creado, donde pudo hacerlo, organizaciones paralelas desde donde amenazaba a los dirigentes. Frente a esto, la participación política fue disminuyendo. El activismo decreció en gran parte debido al miedo, pues la represión del Estado podía llegar a ser tan o más violenta que la de Sendero. La violencia política desarticula así al movimiento popular. En respuesta a Sendero, sin embargo, aparecen nuevos movimientos, como la Asociación Nacional de Familiares, Detenidos, Desaparecidos en Zonas de Emergencia (ANFASEP), y los movimientos de derechos humanos, entre otros.

Con respecto a la crisis económica, esta también obligó a la población a concentrarse en la supervivencia y a abandonar las medidas de lucha ineficaces. Durante 1988, cuando comenzaba a agudizarse la crisis fiscal y la inflación, los ajustes graduales de García hacen que se den cuatro paros nacionales. Balbi y Gamero resaltan que este es el año en que se da la caída salarial más violenta que registra la historia, pero también en el que se da la mayor cantidad de huelgas de los trabajadores en los ochenta. Se luchó en defensa de los derechos conquistados, priorizando la lucha salarial. Los dos últimos paros fueron un fracaso. A medida que la situación económica empeoraba, la capacidad de presión y organización también decrecía. De esta forma, en 1989, cuando la recesión se profundiza y los salarios caen más, como en 1985, no se da ningún paro nacional. No obstante, a diferencia de la crisis durante el gobierno de Belaúnde, los trabajadores utilizaron otras formas de lucha: la negociación, a través del sindicato, de los efectos de la recesión (defendiendo fundamentalmente la estabilidad laboral). Se aprendió que en una recesión, las huelgas y los paros ya no eran eficaces. El sindicalismo pasaba así del «clasismo» a una actitud más pragmática (Balbi & Gamero, 1990). Por otro lado, las organizaciones vecinales también tuvieron que replegarse y concentrarse en la organización de la supervivencia. El gobierno aprista implementó programas de apoyo social bastante sectarios y centralistas. Se estaba abonando el terreno

que permitiría el surgimiento del vínculo clientelista que ocuparía el rol central en la década siguiente.

e) Estancamiento de los partidos, grupos de interés y movimientos.

El fin de una etapa

De esta manera, las disputas intra e interpartidarias, la corrupción, el fracaso económico, la falta de capacidad para lidiar con el problema del terrorismo y la violación sistemática de derechos humanos hacen que los partidos se vean además de poco representativos, ineficientes y corruptos. Como se ha mencionado, las estrategias de lucha de los sindicatos y movimientos se hacen también ineficientes en medio de las crisis. Tanaka menciona, como se ha señalado líneas arriba, que la lógica electoral-movimientista termina sin que los partidos ni los grupos de interés se percaten. Este autor reclama la atención sobre una arena que comenzaba a cobrar autonomía, la opinión pública. En ese sentido, la vinculación de los electores con los partidos se establecía cada vez más a través de los medios, a través de la «imagen». Se estaba constituyendo la lógica reemplazante, la lógica electoral-mediática (Tanaka, 1998).

La caída de los grandes metarrelatos (socialismo, modernidad, progreso, etcétera) produce también una inseguridad ontológica fuerte. Como bien apunta Rochabrún (2007, p. 419), al agotarse los paradigmas de desarrollo creíbles desaparece una de las bases de adhesión a los partidos. En momentos de crisis, señala Kurt Weyland (2000, p. 230), cuando la población no tiene ya nada que perder, hay más probabilidad para apostar, para aventurarse a elegir a un desconocido, a un redentor. Ese es el inicio de Fujimori.

4. PERÍODO DE 1990 A 2000

La crisis sin precedentes de finales de los ochenta desprestigió a los partidos (tanto por dejar de ser representativos como por ser ineficaces para superar las crisis que azotaban el país); pero en los noventa Fujimori hace que se pase de un antipartidismo reactivo (que criticaba privilegios, inconsistencias, corrupción) a un antipartidismo cultural que cuestiona el sentido mismo de los partidos, haciendo creer que estos introducen falsas divisiones en la población (Grompone, 2005, p. 217). Hagopian (2000, p. 296) cita a Cotler señalando que si de 1980 a 1987 se había generado la descomposición de las identidades partidarias, de 1987 a 1992 se había llegado a producir una desintegración de las identidades políticas. Fujimori buscaba así que se cuestionen los fundamentos de la representación política y, consecuentemente, de la democracia.

4.1 ¿Cómo es que los nuevos intereses societales se revinculan con las instituciones políticas del autoritarismo?

Alberto Fujimori instaló un régimen político autoritario. Así como la crisis de la sociedad oligárquica, que los partidos no supieron procesar a tiempo, facilitó el ascenso de un régimen dictatorial que implementó los cambios —el GRFA—, también la crisis de la sociedad Estado-céntrica, no identificada por los partidos, facilitó la instalación del gobierno autoritario de Fujimori. Como Velasco en los setenta, Fujimori en los noventa impondría un nuevo y diferente tipo de vínculo entre el Estado y la sociedad.

A pesar de haber prometido que no realizaría un ajuste estructural o *shock* económico, como sí lo había anunciado su principal adversario —Mario Vargas Llosa—, apenas accedió al poder, Fujimori implementó uno de los programas de estabilización más drásticos de la región con el objetivo fundamental de reducir la hiperinflación. Más adelante, en 1991, pasó a una segunda etapa en la que aplicaría las reformas estructurales basadas en el Consenso de Washington. El gobierno se encargó de cumplir todos los requisitos demandados por los organismos internacionales —Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM)— para reinsertar al Perú en la comunidad financiera internacional. Así, se propició un margen de intervención a los agentes y mecanismos de mercado a la par que se buscó que el Estado le sea funcional. Entre las principales reformas emprendidas destacan la profundización de la liberalización comercial y financiera, la flexibilización del mercado laboral, las medidas de promoción de la inversión privada, y el inicio del proceso de reforma del Estado. Por otro lado, el impacto de la recesión y de la política liberal se manifestó en el desmantelamiento de la industria, la política de privatización de las empresas públicas y la racionalización de la administración pública (Balbi, 1994). A esto se sumó una draconiana ley de huelgas.

En 1992, Fujimori, que no tenía mayoría en el Congreso, consideró que este era un obstáculo para continuar las reformas estructurales y su plan de «pacificación» contra el terrorismo; y que la consolidación del modelo neoliberal y la nueva legislación antiterrorista requerían eliminar la oposición política. Por estas razones es que el 5 de abril, mediante una alocución pública dirigida al país, Fujimori concreta el denominado autogolpe anunciando la disolución del Congreso, la reorganización del Poder Judicial y la instauración de un «gobierno de emergencia y reconstrucción nacional». El 80% de los peruanos apoyó estas medidas. En noviembre de 1992, ante las presiones internacionales, Fujimori convocó a elecciones para elegir a los miembros del llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD). En este nuevo Congreso, Fujimori cuenta

con la mayoría que le permite redactar y aprobar una constitución ajustada a sus lineamientos de política. En octubre de 1993, esta constitución se somete a referéndum obteniendo el apoyo del 52,24% de la población. Con este nuevo marco, se eliminan los obstáculos para las reformas neoliberales y se logra establecer una nueva Ley de Defensa que otorga carta blanca a las fuerzas armadas para implementar una agresiva política contrasubversiva que derivó, en ciertos momentos y ciertos lugares, en delitos de lesa humanidad que, al contar con el apoyo del gobierno, gozaron durante un tiempo de impunidad.

El autogolpe fue ampliamente respaldado por el empresariado y los sectores populares, los dos grupos con los que el autoritarismo gobernará.

Los grupos de interés como la CGTP fracasaron en su protesta contra el ajuste económico no solo debido a la represión del gobierno, sino también, y principalmente, a la desconexión entre las bases y la dirigencia. Los trabajadores formales y la gran masa de informales se sentían cada vez menos representados por los gremios establecidos; el sindicalismo no llegó a promover propuestas globales o de carácter aglutinante que expresaran los intereses del conjunto de la clase trabajadora tradicional y sus nuevas categorías. El sindicalismo no encontró la forma de dar respuesta a los nuevos lineamientos de la política liberal (Balbi, 1994). Por otro lado, debido a los escándalos de corrupción, a sus pugnas internas y a la ineficiencia, los partidos estaban aún más desprestigiados. En síntesis, el apoyo masivo al cierre del Congreso expresó el agotamiento del vínculo representativo como había sido establecido en los ochenta. Las reformas estructurales en la economía culminan el proceso de agotamiento del modelo Estado-céntrico iniciado a fines de los ochenta. Este cambio estructural, además de quitarle al Estado el rol de productor para convertirse en administrador, terminó por minar también las bases del vínculo representativo establecido en los ochenta.

La política de Fujimori impuso un nuevo tipo de vínculo entre la sociedad y el Estado. Al respecto, Balbi habla de una «delegación vigilada» y Tanaka de un «neoclientelismo». Ambos conceptos son similares. Para Balbi, la relación entre la población y Fujimori pasó de una adhesión entusiasta con el autogolpe a un apoyo más razonado con el referéndum constitucional del año siguiente. El apoyo posterior al referéndum habría sido más pragmático, en función a un análisis costo-beneficio (Balbi, 1996). Tanaka parece tener un análisis similar al indicar que el vínculo clientelar no es tradicional en tanto la adhesión al líder no es signo de entusiasmo sino de resignación. Los recursos estatales se aceptan y se usan simplemente porque se necesitan en una relación de intercambio, antes que de lealtad. No se trata aquí de una manipulación, el apoyo a Fujimori fue condicional y selectivo. Tanaka (1999) señala que se trató de un vínculo neoclientelar entre la sociedad y el Estado. Este vínculo no es puramente delegativo

o plebiscitario, sino uno donde la relación entre el gobierno y la población está en continua negociación en función de los intereses particulares de cada uno. Pero, además de esta relación, Fujimori estableció también un vínculo mediático a través de los medios de comunicación y la opinión pública que se reflejaba en las encuestas. Esto encajaría dentro del enfoque de Bernard Manin (1992), quien habla del paso de la democracia de partidos a la democracia de lo público, donde la ciudadanía se transforma en audiencia. Tanaka también advierte sobre la aparición de una nueva lógica, la lógica electoral-mediática que suplanta a la lógica electoral-movimientista.

a) El neoclientelismo

Desde los primeros programas de ayuda social luego del *shock* económico, el régimen fujimorista construyó redes de clientelas con las que consiguió el apoyo de los sectores más vulnerables al ajuste estructural.

Fujimori estableció un sistema de intermediación política basado en operadores políticos independientes o *brokers*, antiguos militantes reciclados de diversos partidos, mediante los que se hacían llegar «obras» a los sectores que habían estado más desconectados del Estado y del mercado.

Los *brokers* legitimaban su función en la inestable y cambiante red de distribución de prebendas por medio del aparato estatal que estableció el régimen fujimorista (Meléndez, 2005). El *brokerage* es un mecanismo de transacción de demandas caracterizado por la distribución de bienes y servicios por medio de una mediación individualista. Es posible gracias a la centralización y escasez de recursos, y desorganización de la sociedad. Uno de los resultados evidentes del *brokerage* es reforzar la personalización de la política. El triunfo de Fujimori en las elecciones de 1995 se debió, en gran parte, al fuerte gasto social invertido en las redes neoclientelares. A lo largo de su gobierno, Fujimori se encargó de fortalecer estas redes de operadores políticos para mantener el apoyo de los sectores populares a cambio de bienes y servicios.

Uno de los casos más representativos de *broker* es el de Absalón Vázquez, un fogueado ex militante del APRA que conocía a Fujimori desde que este fuese rector de la Universidad Nacional Agraria. Yusuke Murakami explica que Vázquez fue la conexión entre el gobierno y las provincias gracias a las amplias redes de clientelaje que había cultivado (2007, p. 525). En 1998, bajo órdenes del gobierno, Vázquez constituyó el movimiento Vamos Vecino para que el oficialismo participe en las elecciones municipales de ese año. Grompone afirma que Vázquez armó su propio aparato político creando una estructura paralela al Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), esta vez con rostro visible, que daría un sustento social

no desdeñable al fujimorismo, aunque Fujimori quedaba fuera del primer plano. Se capitalizaba así la tradición organizativa de la población para formar redes que serían más eficaces que antaño, en tanto que ahora se podía llegar a las instancias de decisión con una intención reivindicativa velada y sin plantear confrontación. Así, en las elecciones municipales de 1998, la capacidad de movilización de Vázquez produjo sus frutos, pues muchos candidatos oficialistas salieron elegidos (se ganó en 76 de las 194 provincias, y en 597 de los 1622 distritos) y de este modo el *broker* demostró que tenía una fuerza nada despreciable. Su capacidad de movilización a nivel de provincias constituyó un soporte importante para las elecciones del 2000.

b) Lógica electoral-mediática

Los medios de comunicación jugaron también un papel muy importante en la construcción del personaje político y en la representación de la opinión pública. Carlos de la Torre (2007, p. 11), siguiendo a Boas, indica que la televisión es el medio por el que los líderes neopopulistas se vinculan con las masas atomizadas y desorganizadas del sector informal. Y, en efecto, Fujimori supo utilizar tanto la televisión como la denominada prensa «amarilla» o «chicha» a lo largo de su gobierno. Transmitió sus viajes por todo el país mostrando lo «cerca» que estaba él mismo de toda la población, sin partidos, ni ministerios, ni otras organizaciones de por medio. Carlos Iván Degregori (2000, p. 145) señala que se utilizaron los medios para ofrecer la «ilusión de participación e igualdad»; se hacía ver en Fujimori «un presidente como tú», un peruano común y corriente que sabe tomar las decisiones fuertes que los peruanos quieren y que el Congreso y las demás instituciones impiden. Frente a una esfera pública debilitada y que podía sucumbir ante las presiones económicas y políticas del régimen, Vladimiro Montesinos pudo montar un aparato de propaganda del que se beneficiaron tanto los ejecutivos como los periodistas (Degregori, 2000, p. 15). Fujimori supo aprovechar las ventajas de la nueva lógica electoral-mediática para vender su imagen.

c) La política del miedo

Para terminar de explicar el tipo de vínculo entre la sociedad y el Estado en tiempos de Fujimori, además del neoclientelismo y la lógica electoral-mediática, es importante mencionar también la política del miedo, como la ha llamado Jo Marie Burt (2006). Esta política consistió en criminalizar la protesta y poner la etiqueta de «terrorista» a la oposición incómoda. La captura de los líderes del PCP-SL y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Abimael Guzmán

y Víctor Polay, respectivamente, hizo que la gran mayoría del país apoyara la estrategia autoritaria. Fujimori aprovechó esto para sembrar el miedo en los ciudadanos, así como para deslegitimar todo intento opositor. Esta es una de las razones principales por las que el conflicto social no se manifiesta. Y si lo hace, es de forma desorganizada y fragmentaria. A esta razón se suma, por supuesto, la poca capacidad de los movimientos y sindicatos para implementar nuevas estrategias de lucha y reestablecer sus vínculos con los grupos que pretendían representar. En detrimento de estos últimos, proliferaron en cambio las organizaciones de supervivencia, apoyadas por el gobierno.

En resumen, las bases de la revinculación entre los intereses sociales y el gobierno autoritario fueron: *a)* el neoclientelismo, *b)* la lógica electoral mediática y *c)* la política del miedo. Las reformas estructurales acabaron con el modelo Estado-céntrico imponiendo un desarme del Estado que no supo ser respondido con una propuesta alternativa por parte de los grupos de interés de los trabajadores. La gran mayoría de la población aceptó con resignación el ajuste y confió en el programa de estabilización de Fujimori. El aparente éxito del modelo para 1995 (sumado al fuerte gasto social en las regiones donde menos votación había obtenido en el referéndum constitucional de 1993) hizo que la población recompensara pragmáticamente a Fujimori renovándole su apoyo en las elecciones de ese año. De la misma forma, la publicitada derrota del terrorismo adjudicada a la «mano dura» hizo que la población reafirme su apoyo al gobierno y se aleje cada vez más de la lógica movimientista, constantemente descalificada por los medios. El conflicto social se redujo y por momentos desapareció. Pero, por supuesto, esto no podría durar por siempre.

d) La caída del autoritarismo

La presión internacional, los escándalos de corrupción, las discrepancias internas y la movilización popular hacen que el régimen caiga cuando intentaba un tercer periodo presidencial. La movilización evidenció la presencia de una aún existente, pero debilitada, sociedad civil organizada.

Destacó la activa participación de los frentes provinciales, departamentales y regionales que en marzo de 1999 formaron la Coordinadora Descentralista de Frentes Regionales potenciando su poder de negociación frente al gobierno central y coordinando sus esfuerzos en el ámbito nacional (Kahatt, 2002, pp. 474-476). Esto fue un importante antecedente del proceso de descentralización que se daría más adelante. Los trabajadores con experiencia sindical, las clases medias profesionales, la gran red de ONG (particularmente de derechos humanos)

que se había ido formando en los noventa, los movimientos regionales y los jóvenes universitarios fueron actores centrales en la lucha contra la dictadura.

La sociedad civil se había transformado. Cuando se retorna a un régimen democrático en noviembre de 2000, con la toma de mando de Valentín Paniagua, el escenario era muy distinto al del retorno a la democracia de los ochenta con Belaúnde. Entonces, existía una sociedad civil organizada y politizada, con grupos de interés representativos y un sistema de partidos que agrupaba las opciones políticas de la gran mayoría. En contraste, a finales de 2000, luego de la caída de Fujimori (cuya salida era el único tema que unía a diferentes sectores de la sociedad civil), se tenía una sociedad civil fragmentada, desorganizada y antipolítica. Existían numerosas organizaciones sociales, pero la mayoría dedicada a luchar por la sobrevivencia y con poca capacidad de impactar en la política. No existía nada parecido a un sistema de partidos y la mayoría de la población mantenía una posición antipartidista. Era evidente que los vínculos establecidos por el autoritarismo serían difíciles de modificar.

5. PERÍODO DE 2000 A 2008

5.1 ¿Se vuelven a modificar los intereses societales? ¿Cómo se están revinculando con las instituciones del nuevo régimen democrático?

a) La novedad: el proceso de descentralización

En la lucha por la democracia, los intereses societales no se llegaron a modificar como sí ocurrió a finales de los sesenta y de los ochenta. En la primera década del siglo XXI, han continuado, aunque con menor intensidad, los procesos de migración y urbanización. De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de 2007, la población urbana alcanza ya el 75,9% de la población total. Asimismo, se ha seguido incrementando el acceso a la educación; en 2006, la cobertura en primaria ha alcanzado el 93,1% y; en secundaria, el 72,6%. No obstante, el objetivo de aumentar el acceso a la educación se ha cumplido a costa de reducir los estándares de calidad⁹. Por otro lado, los procesos de globalización y de agotamiento del modelo Estado-céntrico —con la desindustrialización y consecuente informatización— de finales de los ochenta se han consolidado junto al incremento del desempleo y subempleo.

⁹ El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (PISA) corroboró, en 2001, el bajo rendimiento estudiantil de los jóvenes peruanos. De 43 países participantes en la prueba, Perú fue el único país donde más de la mitad de sus estudiantes, cerca del 54%, se ubicó en el nivel más bajo de la escala establecida. Véase <<http://www.pisa.oecd.org>>.

La novedad de esta década es el proceso de descentralización. Durante el gobierno de Toledo, en 2002 y 2006 se celebraron elecciones regionales y municipales, dejando atrás los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR). La descentralización ha implicado la progresiva transferencia de funciones políticas, económicas y administrativas. En pleno crecimiento económico, esta transferencia de recursos a las regiones, provincias y diversas localidades ha llegado, en muchos casos, a sobrepasar su capacidad de gestión de la inversión. Por otro lado, si bien sería un error decir que el modelo neoliberal está agotado, sí es cierto que sectores cada vez más amplios de la población están disconformes con los resultados.

b) Los obstáculos a la reforma participativa

Durante la transición se intentó recomponer el sistema de partidos y recuperar el prestigio de la democracia como sistema de representación política. El presidente Paniagua promovió además un *boom* participativo con el que se buscaba restablecer un vínculo democrático entre la sociedad y el Estado que promueva la fiscalización y propuesta constante de la sociedad civil. Se trataba, así, de desarmar la red de clientelaje del autoritarismo. Otro de los hechos fundamentales de su gestión fue la creación de la CVR, la cual dio cuenta de la incompetencia de la clase política y de la indiferencia de buena parte de la sociedad civil frente a la guerra interna entre 1980 y 2000, y recomendó por ello la necesaria refundación del pacto social.

Alejandro Toledo llegó a la presidencia como un nuevo *outsider*, sin un verdadero partido. En un principio representó la demanda antidictatorial que se formó en las manifestaciones contra Fujimori. Toledo encabezó estas protestas, particularmente la «Marcha de los cuatro suyos», y se autodesignó el representante de «todas las sangres». La mayoría de los sectores que habían luchado contra el gobierno fujimorista se identificaron rápidamente con él. Otro gran sector también se logra identificar con Toledo pero no por su mensaje antiautoritario, sino por su «cercanía». Su perfil étnico indígena favorece su identificación con el electorado. Además, en la ya consolidada lógica electoral-mediática, los medios construyeron la imagen de «el cholo que la hizo». Se le presenta como el cholo que nació pobre, paupérrimo, que lustró zapatos pero que, al final, llegó a estudiar en Harvard y casarse con una gringa. La imagen que se vende de Toledo es una imagen grata, una imagen de éxito bastante valorada. Los medios lo presentan así y, una vez más, la población «se engancha» y vota por él.

Durante el gobierno de Toledo, se continuó con el *boom* participativo y comenzó el proceso de descentralización. Si bien Toledo no tocó el modelo económico neoliberal, intentó continuar con las reformas de institucionalidad

democrática hechas durante el gobierno de Paniagua. En este marco, se organizó el Acuerdo Nacional suscrito por diversos partidos y organizaciones de la sociedad civil, para institucionalizar el diálogo y consenso democrático; y se promulgó la Ley de Partidos Políticos, que tendría el objetivo de institucionalizar un sistema de partidos. El proyecto participativo promovía efectivamente una mayor intervención de la población en la toma de decisiones y se vinculaba bastante bien con la reciente descentralización. Se establecieron instancias como la Mesa de Lucha Contra la Pobreza, las mesas de concertación, los presupuestos participativos, etcétera. Sin embargo, el partido del gobierno, Perú Posible, le pondrá obstáculos a este proceso en 2002, cayendo seducido por la aparente facilidad del vínculo neoclientelista frente al amenazante vínculo participativo¹⁰. Meléndez (2005, pp. 176-177) explica que «los mecanismos de participación se posicionan como canales de mediación entre un Estado que no puede garantizar autoridad ni satisfacción de demandas y una sociedad fragmentada cuyos intereses resultan difíciles de representar. Los partidos llegan con dificultades al nivel regional pero, en el nivel local, lo que funciona son los operadores políticos». Para este autor, con el *boom* participativo el Estado prometió mucho más de lo que podía cumplir, generando expectativas que luego fueron frustradas. Esta sería una de las explicaciones del incremento de protestas y conflictos por todo el país.

c) Una forma conflictiva de vincularse con el Estado

Con el cambio de la estructura de oportunidades políticas a raíz del cambio de régimen, diversos conflictos sociales volvieron a brotar en todo el país. Una de las razones que propició el estallido de los conflictos fue la falta de intermediarios eficaces entre la sociedad y la política. Luego del colapso del vínculo representativo, el vínculo neoclientelista o de *brokerage* instalado por Fujimori tuvo que mantenerse frente a la falta (o fracaso) de alternativas. Sin embargo, sin la red neoclientelar redistributiva que había armado Fujimori y sin la política del

¹⁰ La fractura del proceso de participación se inicia en noviembre de 2002 con el proceso electoral que pone en marcha el proceso de descentralización y continúa con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972 de mediados de 2003, donde sectores del partido del gobierno, en alianza con los partidos tradicionales presentes en el congreso, limitan el alcance y la obligatoriedad de los acuerdos tomados en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), al mismo tiempo que crean nuevos consejos de coordinación regional y municipal (Consejo de Coordinación Regional (CCR) y Consejo de Coordinación Local (CCL)) que duplicaron las funciones de las mesas respecto a la elaboración de los planes de desarrollo concertado. Panfichi sostiene que la negativa de los partidos al proceso participativo parece estar vinculada a la hegemonía en estas organizaciones de una concepción delegativa de la democracia y del liderazgo político, como también a recelos frente al surgimiento de nuevos actores y espacios que hace más compleja la problemática de la representación política. Véase Panfichi (2007, pp. 36-41).

miedo, la competencia por la redistribución de recursos se hizo más agresiva y estalló. En esta situación, el conflicto se presentó como otra forma de vincularse al Estado cuando no se tiene acceso al vínculo neoclientelar o cuando este resulta insuficiente. Las políticas participativas y la descentralización deberían haber canalizado las demandas populares, pero el fracaso de las primeras hizo que estallaran los conflictos, muchas veces, de forma violenta. Es por esto que aparecieron los movimientos de cocaleros, maestros, empleados públicos, antimineros, etcétera. Y, a pesar de que estos movimientos son desarticulados y dispersos, cada vez amenazan más a la gobernabilidad.

Quedaron entonces dos tipos de vínculos entre la sociedad y el Estado: *a)* el vínculo neoclientelar, o de *brokerage*, instalado por Fujimori; y *b)* el conflicto social, que estalla y obliga al gobierno a dialogar.

5.2 Período del 2006 al 2008: el nuevo impulso neoliberal de Alan García y la posibilidad de nuevos vínculos entre la sociedad y el Estado

Las elecciones del 2006 polarizaron a la sociedad peruana. Los intereses societales que preferían un orden alternativo al neoliberal y se vieron traicionados por Toledo optaron por un cambio, pero no por el cambio radical que proponía Ollanta Humala, quien proclamaba representar a los excluidos —en una simplificación velasquista de la sociedad—, sino por el cambio responsable de un reeditado Alan García, que apelaba al discurso de centro, donde el APRA siempre ha buscado ubicarse.

a) Nuevo impulso neoliberal

En este periodo, García, como Toledo, no buscó hacer ningún cambio en el modelo económico, traicionando a buena parte de la demanda popular que lo llevó a la presidencia. El modelo sigue siendo prácticamente el mismo que Fujimori instalara en 1990. Pero, aún más, García parece querer dar un nuevo impulso al modelo neoliberal. Para el García de 2008, el único camino para conseguir el desarrollo consiste en valorizar los recursos económicos del país para su explotación mediante la propiedad privada y las grandes inversiones. Para esto, habría que enfrentar a dos enemigos del desarrollo: los perros del hortelano y el aparato estatal. El presidente ha escrito una serie de artículos (3) conocidos hoy como la saga del «Perro del hortelano» donde explica su visión del desarrollo criticando a los intelectuales y agitadores (para él, viejos comunistas del siglo XIX que ahora se disfrazan de medio ambientalistas) que estarían truncando el avance del país al no producir y no dejar que nadie más produzca. De igual manera, critica también

a la burocracia estatal y al Congreso, que en su afán controlador, retrasaría la ejecución de las propuestas «modernizadoras» desde el Ejecutivo (García, 2008). Esta visión de García se ha materializado en la promulgación de más de cien decretos legislativos en ciento ochenta días para legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Por supuesto, estos decretos no solo tienen que ver con el TLC, sino también con la profundización del modelo neoliberal. Un ejemplo es el decreto 1015 que buscaba facilitar la venta de tierras de comunidades campesinas a empresas extractivas, reduciendo el voto aprobatorio de las dos terceras partes a solo la mitad de la comunidad más uno. Este decreto, denominado «la ley de la selva», provocó la movilización más grande hecha por los pueblos nativos del Perú. Con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones, la extendida protesta logró derogar la ley.

Pese a las reiteradas críticas por el giro cada vez más neoliberal que toma su gobierno, García parecía sentirse satisfecho con el significativo crecimiento de la economía que llegó al 8,9% en 2007 y que tuvo un ritmo de más de 10% anual entre enero y mayo de 2009. Y es que frente a la incapacidad del Congreso, las disputas al interior del APRA y el Partido Popular Cristiano, la falta de acción coordinada del nacionalismo en el sistema político, la sumisión de los ministros, y la primacía de intereses regionales particulares en la Asamblea de Gobiernos Regionales, la política —como señala Ballón— terminó reducida a la figura de Alan García.

El presidente ocupaba todo el escenario criticando y hasta descalificando a todos los demás actores (Ballón, 2008). Su actitud era peligrosamente autoritaria y buscaba que su partido, bajo su absoluto control, tuviese cada vez más control del Estado. Una de las últimas manifestaciones de esto se tradujo en el evidente intento de copar el Estado al haber nombrado a militantes apristas en cargos claves como la dirección del Fondo de Compensación para el Desarrollo Social (FONCODES), del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), del Programa Crecer, la dirección del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de los Suelos (PRONAMACHCS), del Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

A esto se suman «compañeros» que encabezaban el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Superior de Justicia de Lima. La presencia aprista en lugares estratégicos de los principales programas de ayuda social recordaba mucho la red neocientelista que Fujimori armó en los noventa. La diferencia es que Fujimori trabajó sin un partido, con

maquinarias electorales y operadores políticos; en cambio, García tuvo detrás a la única organización que puede calificarse como partido político en el país. Con esta base organizativa, su control autoritario podría ser más sólido.

Sin embargo, la desaprobación a su gestión fue cada vez mayor. Los datos de la encuesta aplicada por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP en junio de 2009 señalaban que el 63% de la población desaprobaba al gobierno (y en el sur, la desaprobación llegaba al 77%). El vínculo neoclientelista resulta cada vez más insuficiente para demandar una redistribución acorde con el crecimiento que tanto se publicita y, por ello, el conflicto social se constituye como la principal forma de relación que establece la población con el Estado.

b) Nuevas formas de intermediación entre la sociedad y el Estado

El conflicto social se manifiesta ahora utilizando también otros medios de intermediación. Hagopian (2000, pp. 318-319) advertía que la naturaleza de la representación política se descentralizaría. En el Perú, el proceso de descentralización no comenzó precisamente con Toledo, sino con las protestas regionales de finales del gobierno fujimorista. Las sociedades locales demandaron y demandan una intermediación con el gobierno central para obtener recursos y protestar por diversos problemas. Es verdad que no están satisfechas con la gestión de los gobiernos locales, y el enfrentamiento frontal con estos representa un gran porcentaje de conflictos en el país. Pero, sin embargo, desde noviembre de 2006, la mayoría de los gobiernos regionales son conducidos por movimientos (más que partidos) regionales. Con esto, la población apostó por una alternativa de intermediación más cercana que los distantes y oportunistas partidos nacionales. Se trata de un cambio importante porque se desplazan los partidos nacionales que solo ganan en cuatro de las veinticinco regiones (el APRA en la Libertad y Piura, Unión por el Perú en Cusco, y el Movimiento Nueva Izquierda en Pasco). La opción del movimiento regional en el gobierno, como vínculo entre la población regional y el Estado central, es una alternativa que podría permitir una diferente canalización de los conflictos sociales.

Por otro lado, y para terminar, habría que mencionar también que muchos de los demandantes en conflictos antimineros, por el medio ambiente o por reivindicaciones indígenas, al no tener eficiente intermediación o representación en los partidos o movimientos actuales, se vinculan a organismos internacionales con capacidad de ejercer presión al gobierno (por ejemplo, OXFAM). Este fenómeno se daba desde los ochenta con las organizaciones de derechos humanos, pero es interesante ver que ahora se multiplican en diversos conflictos, como bien señala Anthony Bebbington (2007, p. 191). Con el apoyo de estos organismos,

se fortalecen también en el país redes que promueven el desarrollo alternativo y sostenible, defendiendo los intereses de los pobladores afectados, sobre todo, por las mineras. La Red Muqui es un claro ejemplo de la articulación de diversas organizaciones sociales por la promoción del desarrollo sostenible. Estas redes servirían también como mecanismos de intermediación alternativos que podrían organizar los conflictos, sirviendo como interlocutores entre los demandantes y el gobierno.

Así, *a)* los gobiernos regionales dirigidos por movimientos regionales y *b)* las redes transnacionales y nacionales a las que se apelan podrían servir como vínculos alternativos entre la sociedad y el Estado. Se podría hablar de un mecanismo de intermediación glocal en tiempos de globalización, donde los actores nacionales, como los partidos, no tienen la capacidad de establecer vínculos efectivos y eficientes con una gran diversidad de demandas.

6. CONCLUSIONES

A lo largo de estos últimos cuarenta años, diversos procesos estructurales han impactado en los intereses sociales haciendo que la vinculación entre la sociedad y el Estado se modifique repetidamente. Esto ha imposibilitado la institucionalización de un eficiente vínculo representativo. El primer momento de cambio se da a finales de los sesenta, debido al impacto de los procesos de migración, urbanización e industrialización, junto al mayor acceso a la educación. Estos procesos cambiarían los intereses sociales promoviendo la idea crítica y el clasismo. Los nuevos intereses rechazarían la vinculación patrón-cliente con el Estado que sostenía en el poder a la oligarquía. El GRFA realizó una serie de reformas Estado-céntricas y buscó representar los nuevos intereses desde el Estado, estableciendo un vínculo corporativo con la población para que, de esta manera, se pueda modernizar la sociedad «ordenadamente». Sin embargo, el desborde de los movimientos sociales politizados y la aparición de la nueva izquierda sobrepasaron los límites impuestos por la revolución militar exigiendo un vínculo auténticamente representativo. Es así que en la década de los ochenta se retorna a la democracia con un sistema de partidos y grupos de interés de los distintos sectores de la sociedad. Se establece, así, un vínculo representativo.

El segundo momento de cambio se daría a finales de los ochenta e inicios de los noventa. Para entonces, los procesos de migración y urbanización continuaban; mientras que el proceso de industrialización se detenía. Por otro lado, se evidenciaban el proceso de agotamiento del modelo Estado-céntrico y el mayor impacto del proceso de globalización, tanto en el campo político como en el económico y cultural. Además, el país vivía el peor momento de violencia

política y de crisis económica. Frente a todo esto, las identidades sociales se volvían inestables y las identidades políticas se perdían. Los discursos que se basaban en las capacidades del modelo Estado-céntrico pierden vigencia, junto a la idea crítica y el clasismo que serían reemplazados por el economicismo y el pragmatismo. El cambio de intereses societales, entonces, impulsaría el rechazo al vínculo representativo de los ochenta por su ineficiencia, buscando conectarse de otra manera con el Estado. La vinculación a través de los medios de comunicación con la política sería el inicio del cambio de una lógica electoral-movimientista a una lógica electoral-mediática. Fujimori sabría aprovechar esta nueva lógica y vendería bien su imagen para llegar al poder. El nuevo gobierno instauraría una serie de reformas de ajuste estructural o neoliberales que le darían el golpe final al modelo Estado-céntrico y establecería un vínculo neocientelista con la sociedad. Los éxitos en cuanto a superación de la crisis económica y derrota del terrorismo harían que la población renueve su apoyo al líder. Fujimori mantendría así su régimen a través del vínculo neocientelista, la lógica electoral-mediática y la política del miedo.

Luego de la caída de Fujimori, lo que hemos tenido son algunos cambios y continuidades. Los procesos de migración, urbanización y acceso a la educación han continuado. El proceso de globalización, con todas sus implicancias, se ha intensificado. Y junto a estos, surge un nuevo proceso de descentralización. Los intereses societales han seguido, básicamente, el mismo camino desde inicios de los noventa. Sin embargo, la insatisfacción con el modelo neoliberal se acrecienta y manifiesta en el incremento de conflictos sociales. El gobierno de transición intentó instaurar un nuevo vínculo participativo que reemplace al neocientelismo fujimorista pero, durante el gobierno de Alejandro Toledo, esta iniciativa se vio limitada. Toledo armó sus propios vínculos neocientelistas y tuvo que afrontar una relación a través del conflicto social con los pobladores que demandaban por diversos temas. En el segundo gobierno, presidido por Alan García, el APRA retomó sus vínculos clientelares, creó nuevos (más aún con el copamiento del Estado por el partido del gobierno) y fue incapaz de superar la relación conflictiva con la población. Sin embargo, los gobiernos regionales, dirigidos por movimientos regionales, y las redes transnacionales se muestran como vínculos alternativos para moderar/organizar el conflicto en tiempos de globalización.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcántara, Manuel (2004). *¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos latinoamericanos*. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.
- Balbi, Carmen Rosa (1989). *Identidad clasista en el sindicalismo: su impacto en las fábricas*. Lima: DESCO.
- Balbi, Carmen Rosa (1994). Sindicalismo y flexibilización del mercado de trabajo en el Perú. *Debates en Sociología*, 19, 91-117.
- Balbi, Carmen Rosa (1996). El fujimorismo: delegación vigilada y ciudadana. *Pretextos*, 9, 187-233.
- Balbi, Carmen Rosa & Julio Gamero (1990). Los trabajadores en los 80: entre la formalidad y la informalidad. En Carmen Rosa Balbi, *Movimientos sociales: elementos para una relectura* (pp. 51-109). Lima: DESCO.
- Ballón, Eduardo (2008). El cambio responsable que nos aleja del futuro diferente. En Eduardo Toche (Comp.), *Perú hoy: por aquí compañeros. Aprismo y neoliberalismo* (pp. 26-31). Lima: DESCO.
- Bebbington, Anthony y otros (2007). Movimientos sociales, lazos transnacionales y desarrollo territorial rural. En Anthony Bebbington (Ed.), *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales* (pp. 163-230). Lima: Instituto de Estudios Peruanos – Centro Peruano de Estudios Sociales.
- Burt, Joe-Marie (2006). «Quien habla es terrorista»: The Political Use of Fear in Fujimori's Peru. *Latin American Research Review*, 41(3), 32-62.
- Cameron, Maxwell A. (1992). Micro and Macro Logics of Political Conflict: The Informal Sector and Institutional Change in Peru and Mexico. En Archibald Ritter, Maxwell Cameron y David Pollock (Eds.), *Latin America to the year 2000. Reactivating Growth, Improving Equity, Sustaining Democracy* (pp. 209-220). Nueva York: Praeger.
- Cameron, Maxwell A. (1994). *Democracy and Authoritarianism in Peru: Political Coalitions and Social Change*. Nueva York: Saint Martin's.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004). *Hatun Willakuy: versión abreviada del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*. Lima: CVR.
- Coppedge, Michael (1998). The Dynamic Diversity of Latin American Party. *Party Politics*, 4, 547-568.
- Cotler, Julio (1985). Democracia e integración nacional. En Cynthia McClintock y Abraham F. Lowenthal (Comps.), *El gobierno militar, una experiencia peruana, 1968-1980* (pp. 23-62). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Degregori, Carlos Iván (1991). *Demonios y redentores. Una tragedia en dos vueltas*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

- Degregori, Carlos Iván (1993). Qué difícil es ser dios: ideología y violencia política en Sendero Luminoso. En Miryam Jimena Santoyo (Comp.), *Conflicto social y violencia* (pp. 19-32). Bogotá: Instituto Francés de Estudios Andinos.
- Degregori, Carlos Iván (2000). *La década de la antipolítica: auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- De la Torre, Carlos (2007). Medios y política en América Latina: hacia una agenda de investigación sobre medios, representación y calidad de la democracia. Mimeo.
- Flores Galindo, Alberto (1999). *La tradición autoritaria: violencia y democracia en el Perú*. Lima: Asociación Pro Derechos Humanos y SUR.
- García, Mariel (2008). La construcción de la realidad según Alan García. *Argumentos* 2(2). Recuperado de:
<http://www.revistargumentos.org.pe/index.php?fp_verpub=true&idpub=64>
- Grompone, Romeo (1991). *El velero en el viento: política y sociedad en Lima*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Grompone, Romeo (2000). Al día siguiente: el fujimorismo como proyecto inconcluso de transformación política y social. En Julio Cotler y Romeo Grompone, *El fujimorismo, ascenso y caída de un régimen autoritario* (pp. 77-174). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Grompone, Romeo (2005). Modernidad, identidades políticas y representación: cuatro décadas y un desenlace abierto. En Víctor Vich (Ed.), *El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia* (pp. 182-237). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Hagopian, Frances (1998). Democracy and Political Representation in Latin America in the 1990s. Pause, Reorganization, or Decline? En Felipe Agüero y Jeffrey Stark (Eds.), *Fault Lines of Democracy in Post-Transitional Latin America* (pp. 99-143). Boulder: North-South Center.
- Hagopian, Frances (2000). Democracia y representación política en América Latina en los años noventa: ¿pausa, reorganización o declinación? En Ernesto López y Scott Mainwaring (Comp.), *Democracia: discusiones y nuevas aproximaciones* (pp. 265-330). Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Jiménez, Félix (1999). *De la industrialización proteccionista a la desindustrialización neoliberal*. Lima: Consorcio de Investigación Económica.
- Kahatt, Farid (2002). Sociedad civil y gobernabilidad democrática en el Perú. En Aldo Panfichi (Coord.), *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono Sur* (pp. 449-483). México D. F.: Pontificia Universidad Católica del Perú – Fondo de Cultura Económica,.
- Lechner, Norbert (2002). *Las sombras del mañana: la dimensión subjetiva de la política*. Santiago de Chile: LOM.
- López, Sinesio (1991). *El dios inmortal: Estado, sociedad y política en el Perú del siglo XX*. Lima: Instituto de Democracia y Socialismo.

- López, Sinesio (1997). *Ciudadanos reales e imaginarios: concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú*. Lima: Instituto de Democracia y Socialismo.
- Luna, Pedro Pablo (2007). Representación política en América Latina: el estado de la cuestión y una propuesta de agenda. *Política y Gobierno*, XIV(2), 391-435.
- Lynch, Nicolás (1990). *Los jóvenes rojos de San Marcos: el radicalismo universitario en los años setenta*. Lima: El zorro de abajo.
- Mainwaring, Scott & Timothy Scully (Eds.) (1995). *Buildign Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*. Stanford: Stanford University Press.
- Manin, Bernard (1992). La metamorfosis de la representación. En Mario R. dos Santos (Coord), *¿Qué queda de la representación?* (pp. 12-40). Caracas: Nueva Sociedad.
- Manrique, Nelson (2002). *El tiempo del miedo. La violencia política en el Perú 1980-1996*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Matos Mar, José (1984). *Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Meléndez, Carlos (2005). Mediaciones y conflictos: las transformaciones de la intermediación política y los estallidos de violencia en el Perú actual. En Víctor Vich (Ed.), *El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- O'donnell, Guillermo (1994). Delegative Democracy. *Journal of Democracy*, 5(1), 55-69.
- Panfichi, Aldo (2007). *La participación ciudadana en el Perú: disputas, confluencias y tensiones*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Panfichi, Aldo & Cynthia Sanborn (1997). Fujimori y las raíces del neopopulismo. En Fernando Tuesta (Ed.), *Los enigmas del poder: Fujimori 1990-1996*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.
- Parodi, Jorge (1986). La desmovilización del sindicalismo industrial peruano en el segundo belandismo. En Eduardo Ballón (Ed.), *Movimientos sociales y crisis: el caso peruano* (pp. 45-68). Lima: DESCO.
- Pease, Henry (1999). *Electores, partidos y representantes: sistema electoral, sistema de partidos y sistema de gobierno en el Perú*. Lima: Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Pease, Henry (2008). *Reforma política: para consolidar el régimen democrático*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Portocarrero, Gonzalo & Patricia Oliart (1989). La «idea crítica»: una visión del Perú desde abajo. En Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliart, *El Perú desde la escuela* (pp. 103-120). Lima: Instituto de Apoyo Agrario.
- Roberts, Kenneth (1995). Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America: The Peruvian Case. *World Politics*, 48(1), 82-116.
- Roberts, Kenneth (1996). Economic Crisis and the Demise of The Legal Left in Peru. *Comparative Politics*, 29(1), 69-92.

- Roberts, Kenneth (2002). Social Inequalities Without Class Cleavages in Latin America's Neoliberal Era. *Studies in Comparative Development*, 36(4), 3-33.
- Rochabrún, Guillermo (2007). *Batallas por la teoría: en torno a Marx y el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Stokes, Susan (2001). *Mandates and Democracy. Neoliberalism by Surprise in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tanaka, Martín (1998). *Los espejismos de la democracia. Colapso del sistema de partidos en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Tanaka, Martín (1999). Del movimientismo a la media-política: cambios en las relaciones entre la sociedad y la política en el Perú de Fujimori. En John Crabtree y Jim Thomas (Eds.), *El Perú de Fujimori: 1990-1998* (pp. 411-436). Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
- Tanaka, Martín (2005). *Democracia sin partidos. Perú 2000-2005: los problemas de representación y las propuestas de reforma política*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Tovar, Teresa (1985). *Velasquismo y movimiento popular: otra historia prohibida*. Lima: DESCO.
- Tuesta, Fernando (1995). *Sistema de partidos políticos en el Perú 1978-1995*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.
- Webb, Richard (1991). *Perú en números 1991*. Lima: Cuánto.
- Weyland, Kurt (1996). Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: Unexpected Affinities. *Studies in Comparative International Development*, 31(3), 3-31.
- Weyland, Kurt (2000). ¿La paradoja del éxito? Los determinantes del apoyo político al presidente Fujimori. *Debates en Sociología*, 25-26, 213-244.